RESOLUCIÓN: 234 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO)

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a trece de junio de dos mil diecinueve.

V I S T O para resolver el toca 251/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el demandado *****, contra la sentencia de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente *****, relativo al Juicio Sumario Civil de Alimentos, promovido por ***** por sí y en representación de su menor hijo *****, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. La sentencia impugnada concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

“---PRIMERO:- La parte actora demostró en parte los hechos constitutivos de su acción, en tanto que el reo procesal no hizo prosperar sus excepciones y defensas; por lo que:

---SEGUNDO:- HA PROCEDIDO PARCIALMENTE el Juicio Sumario Civil de ALIMENTOS DEFINITIVOS, promovido por la C. ** ***, por sus propios***

derechos como concubina y en representación de su menor hijo *** en contra del C. *****; en consecuencia.**

---TERCERO:- Se condena a la parte reo *** , a pagar a favor del menor ***** , representado por su madre la C. ***** ***** , una pensión alimenticia con carácter definitivo consistente en ***** DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN LA ZONA, correspondiente a \$ ***** (*****) DIARIOS, que multiplicados por ***** , nos da la cantidad de \$ ***** (*****), diarios, que multiplicados por ** (*****) días del mes, no dan \$ *******

(***); cantidad que mensualmente debe pagar el deudor alimentista en concepto de alimentos, del resultado de los trabajos que realice bien formal o informalmente, y que se incrementará conforme aumente el salario mínimo; abonados los primeros cinco días de cada mes; a cuyo efecto, requiérase al demandado ***** , mediante notificación personal, a fin que haga el pago de la cantidad resultante en dinero que como pensión alimenticia definitiva se concede al menor ***** , representado por su madre la C. ***** ***** ***** , con el apercibimiento que de no hacerlo se trabará embargo sobre bienes de su propiedad; en esa tesitura.**

---CUARTO:- No ha lugar a decretar pensión alimenticia a la C. *** ***** ***** , por las razones esgrimidas en el considerando que antecede; asimismo.**

---QUINTO:- Se condena al demandado, al pago de gastos y costas atento al numeral 130 del Código Adjetivo Civil.

---Por cuanto hace a la fijación de las Reglas de Convivencia del menor ***, con su padre el C. *****tomando en consideración que en la Audiencia para tal efecto, celebrada en fecha uno de junio del dos mil dieciocho; después de haber deliberado lo anterior no se logró obtener acuerdo alguno; sin embargo, ambos padres coincidieron en que, si el menor desea convivir con su padre, lo podrá hacer sin obstáculo alguno, por parte de la madre, en virtud de que dicho menor ha estado acudiendo a terapias psicológicas particularmente, y que la psicóloga recomendó que no se forzara al menor respecto a la convivencia con el padre, por lo que, se deja abierta la misma, para que, el menor mencionado decida convivir con su padre, según sea su deseo, siempre y cuando el demandado lo haga en estado conveniente, y siempre prevaleciendo y respetando el interés superior de su menor hijo, a fin de que no sean suspendidas sus terapias psicológicas que se encuentra recibiendo.**

---SEXTO:- Notifíquese a las partes, que de conformidad con el Acuerdo 40/2018, del Consejo de la Judicatura, de fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto, contarán con noventa días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

---NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...”.

SEGUNDO. Notificada que fue la sentencia de primer grado a las partes, el demandado ***** interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por la juez en efecto devolutivo por auto de once de abril de

dos mil diecinueve. La juzgadora remitió el expediente original para la substanciación del recurso de apelación con el oficio ***** de seis de mayo del año que transcurre. Por acuerdo plenario de veintiocho de mayo último fueron turnados los autos a esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar. Se radicó el toca el día siguiente, habiéndose tenido al apelante expresando en tiempo y forma los motivos de inconformidad que estima le causa la resolución impugnada.

Así, quedaron los autos en estado de fallarse; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es competente para resolver el presente recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

SEGUNDO. El demandado ***** manifestó sus conceptos de agravio mediante escrito recibido en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados

Civiles el diez de abril de dos mil diecinueve, que obra agregado al presente toca a fojas 5 a la 13, y que en lo conducente dice:

“...A G R A V I O S

PRIMERO.

Me irroga un severo perjuicio que el A quo no haya valorado correctamente el estudio socio-económico practicado al suscrito (consultable a fojas 554 y 557 del TOMO II) pues solo se limita a decir en el considerando segundo de la sentencia impugnada, lo siguiente: “(Se transcribe)”

Sin embargo, el juzgador, debió de analizar y valorar el estudio socioeconómico realizado al suscrito conforme a los principios de la lógica y la experiencia para ser tomado en cuenta en la sentencia apelada, como lo exigen el primer párrafo del artículo 112, fracción IV, 113 y 392 de la Ley Adjetiva Civil, a saber: “Artículo 112.” “Artículo 113.” “Artículo 392.” (Se transcriben).

Así las cosas, la omisión del juzgador en analizar pormenorizadamente el estudio socioeconómico practicado al suscrito (consultable fojas 554 a la 557 TOMO II) constituye una violación procesal que sin lugar a dudas trascendió al resultado del fallo, ya que con el desahogo de dicha prueba se pretendía demostrar aún más los extremos de mis excepciones opuestas en el libelo de contestación de demanda de fecha 23 de octubre del 2017, lo cual, no fue posible, debido a que solo se limitó a otorgarles valor probatorio en el considerando segundo de la sentencia recurrida conforme a lo establecido en el artículo 408 de la Ley de la Materia, pero no precisa los motivos o razones por las cuales la probanza de mérito no es suficiente para acreditar mis excepciones, ni mucho menos toma en

consideración las condiciones económicas del suscrito que fueron especificadas en el estudio en comento por la Lic. ****, en su calidad de Trabajadora Social de Procuraduría de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos Sistema DIF Tampico, efectuado en fecha 18 de diciembre del 2018, a fin de poder determinar una pensión alimenticia definitiva de acuerdo a mi capacidad económica y situación real en la que vivo, pues el a quo omite tomar en cuenta:**

a). - Que la vivienda en donde habito desde hace dos años aproximadamente, es rentada (pagando mensualmente la cantidad de \$*** (*****)) la cual cuenta con los servicios públicos necesarios, parte del mobiliario ya descrito pertenece la dueña de la vivienda, el mobiliario del suscrito se encuentran en regulares condiciones de uso. En la vivienda se observa signos de humedad y falta de mantenimiento en pintura.**

b). - Que mi oficio de carpintero lo desarrollo en el patio de la casa donde habito (la cual es rentada) y que mi ingreso es eventual de aproximadamente \$*** (*****)) por semana.**

c). - Que, al comparar el total de mis ingresos con el total de los egresos, sería prácticamente imposible cumplir mensualmente con la pensión alimenticia definitiva de \$*** (*****))
impuesta ilegalmente por el juzgador.**

En esa tesitura, se debe de reponer el procedimiento con la finalidad de que el a quo valore nuevamente el estudio socioeconómico realizado al suscrito, en estricto apego, a lo previsto en el artículo 288 del Código Civil del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: “Artículo 288. (Se transcribe).”

Cuando no sea comprobable al salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos dos años.

A mayor abundamiento, resulta ilustrativa la Tesis Aislada de rubro y texto: “PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD”. “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)”. (Se transcriben).

SEGUNDO.

También, me causa agravio el considerando segundo y quinto de la sentencia recurrida, porque al momento de valorar la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, le otorga valor probatorio conforme al artículo 409 del Código de Procedimientos Civiles, al testimonio de ** con el resultado consultable a (fojas 112 y 113) y le niega validez legal a las testigos ***** Y ***** , por no ser idóneas para rendir su declaración, argumentando en el considerando quinto que el segundo de los elementos consiste en demostrar la necesidad de percibir alimentos quedo acreditado con la declaración del testigo ***** , adminiculada a la presunción legal y humana que tiene a su favor el menor acreedor de necesitar los alimentos. Sin lugar a dudas, el proceder del a quo es a todas luces incorrecto, pues aunque el valor de la prueba testimonial queda a su prudente arbitrio, según lo prevé el artículo 409 de la Ley de la Materia, ello no significa que deba violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el hecho que el juzgador le concediera valor probatorio conforme al numeral***

*invocado y precisara las fojas 112 y 113 en donde aparece plasmada su declaración, tenga que otorgársele eficacia demostrativa plena, pues el testimonio que nos ocupa debió ser valorado en su integridad como lo es que todos los testigos ofrecidos por la actora coincidían tanto en lo esencial como en lo incidental del acto, conozcan por si mismas los hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas (como aconteció con los deponentes ***** Y *****) que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los cuales depusieron, que justifiquen la verosimilitud de su presencia, que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la Litis, lo cual en la especie nunca sucedió con el ateste ***** , dado que el a quo en ninguno de los considerandos de la sentencia combatida se adentró el estudio de su declaración, sino que solo se limitó a darle valor probatorio y a decir que la necesidad de percibir alimentos por parte del menor se había acreditado con su declaración, pero al momento de dar lectura al considerando segundo y quinto de la sentencia recurrida, se puede apreciar que el juzgador sólo analizó las deposiciones de ***** y ***** a quienes les negó toda clase de valor probatorio, en ese orden de ideas, el a quo debió de restarle eficacia probatoria al testimonio de ***** por no haber sido analizado y valorado como lo exige el artículo 409 de la Ley Procesal Civil, al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: “PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN” (Se transcribe).*

*También, se le debió de negar valor probatorio a la declaración de ***** , porque en el escrito inicial de demanda de fecha 02 de agosto del 2017, jamás especificó que la necesidad de percibir*

*alimentos del menor le constara a dicha persona, o bien, a las otras dos testigos ofrecidas por la actora, en consecuencia, ni el testimonio de *****; ni el de las otras dos deponentes puede tener la fuerza necesaria para demostrar el hecho “necesidad de percibir alimentos del menor” por no haberse narrado de manera clara y precisa de que esto último les constara a los atestes aportados por la demandante ya que omitió señalar sus nombres en su demanda.*

PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. PARA TENER LA FUERZA NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL HECHO QUE SE PRETENDE, EN LA DEMANDA DEBE NARRARSE DE MANERA CLARA Y PRECISA LA VERIFICACIÓN DE ESE ACONTECIÓ, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE LO PRESENCIARON Y LAS RAZONES POR LAS CUALES LES CONSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). “(Se transcribe)”

TERCERO.

*El considerando quinto de la sentencia recurrida, me irroga un severo perjuicio, al condenarme a pagar a favor del menor ***** , una pensión alimenticia con carácter definitivo consistente en dos DÍAS DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN LA ZONA, correspondiente a \$***** (*****) diarios, que, multiplicados por dos, nos da la cantidad de \$***** diarios, que, multiplicados por ***** , nos dan \$******

(*****)

cantidad que mensualmente debe pagar el deudor alimentista en concepto de alimentos, del resultado de los trabajos que realice bien formal o informalmente y que se incrementará conforme aumente el salario mínimo, abonado los primeros cinco días de cada mes, con el apercibimiento que

de no hacerlo se trabará embargo sobre bienes de su propiedad, por las siguientes razones:

a).- No motiva, ni funda su proceder, es decir, no explica, ni proporciona una razón fundada de su determinación, desvinculándose por completo de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emiten, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad, lo cual, en la especie, nunca acontece, pues el juzgador solo se limita a imponer la cantidad mensual de \$*** (*****)) sin exponer los argumentos que lo orillaron a tomar esa decisión, pus como se dijo en el agravio primero, no analizó pormenorizadamente el estudio socioeconómico practicado al suscrito (consultable a foja 554 a la 557 del TOMO II) porque de haberlo hecho, se hubiera percatado que no cuento con la capacidad económica para poder cubrir dicha cantidad de dinero tomando en cuenta el monto de mis ingresos y egresos.**

b).- No tomó en consideración que la actora al momento de proporcionar sus generales manifestó “SER EMPLEADA”, por lo que cuenta con un trabajo remunerado con el que obtiene un sueldo para cubrir tanto sus necesidades, como para contribuir con los gastos de alimentación del menor ***, pues aunque éste se encuentre incorporado al domicilio de la actora, esa situación no implica que ya no tenga que aportar la porción de los alimentos que le corresponde pagar, toda vez que el rubro de alimentos no se cubre solamente con la vivienda; por tanto, teniendo como base el cien por ciento de las necesidades del menor, la cantidad que corresponda a cada uno de los padres deberá**

repartirse de manera proporcional, según los ingresos que perciban.

En ese sentido, al no haberse pronunciado la resolución judicial combatida conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, se debe de declarar procedente el recurso de apelación planteado, sirviendo de fundamento Tesis de Jurisprudencia:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. “(Se transcribe)”.

CUARTO.

El considerando y punto resolutivo quinto de la sentencia impugnada, me causa agravio, al condenárseme al pago de gastos y costas al numeral 130 del Código Adjetivo Civil, pasando por alto el juzgador que tratándose de juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar en donde se involucren derechos de menores como en el caso a estudio acontece por tratarse de un derecho de mi menor hijo de percibir alimentos, no prospera la condena a gastos y costas por ser improcedente como atinadamente lo establece la siguiente tesis: “GASTOS Y COSTAS. ES IMPROCEDENTE LA CONDENAS A SU PAGO EN LOS JUICIOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO FAMILIAR, E IGUALMENTE, CON EL DE MENORES DE EDAD O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)”. (Se transcribe) ...”.

TERCERO. Los motivos de inconformidad expresados por el demandado *****, a través de los cuales alega que la pensión alimenticia decretada a

su cargo (*****) es desproporcional, no solo por excesiva sino además porque no se impuso también dicha obligación a la madre del menor acreedor; resultan de estudio innecesario, pues de oficio la Sala advierte una violación procesal que trasciende en perjuicio del derecho del menor ***** de nueve años de edad, a recibir una pensión alimenticia justa y proporcional por parte de sus progenitores; lo que conduce a la reposición del procedimiento de primera instancia.

La intervención oficiosa de éste Órgano Colegiado en debida salvaguarda del interés superior del menor, tiene su apoyo en los artículos 4 Constitucional y 1 y 949 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Es que, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad, los juzgadores tienen el deber de preservar el interés superior de la infancia, sin que para ello sea determinante el carácter de quien o quienes promuevan la apelación, ni si el recurso es principal o adhesivo, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes

a los menores, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad en su conjunto la que tiene interés en que la situación de éstos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad.

Lo anterior, porque la voluntad del Constituyente y del legislador ordinario, reflejada en los dispositivos legales mencionados, así como de los criterios emitidos por el más alto Tribunal del País, fue en relación no únicamente con la protección de los derechos de familia, sino también con el ánimo de tutelar el interés de los menores de edad, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr su bienestar, todo lo cual tiene como propósito evitar mayores perjuicios a los infantes de los que ya experimentan por la fractura de la vida familiar ante la separación de sus padres.

Así lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1ª./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Registro 175053, Primera Sala, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Página 167, de rubro siguiente:

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.*La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial dedemanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda,*

insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.”

Como se advierte en dicho criterio de interpretación, no hay límites que se impongan a los Tribunales del Poder Judicial del Estado, cuando se controvertan derechos de familia inherentes a menores de edad, como sucede en el caso respecto al derecho del menor ***** a que se establezca a su favor una pensión alimenticia justa y proporcional con cargo a sus padres; habida cuenta que el Poder Judicial Estatal ha sido investido de facultades amplísimas para intervenir oficiosamente en esta clase de problemas, al grado de que puede hacer valer los conceptos o razonamientos que en su opinión conduzcan a la verdad y a lograr el bienestar del menor de edad.

A efecto de hacer patente la violación procesal que trasciende en perjuicio del menor acreedor, se estima conveniente destacar que en la sentencia apelada la juez estableció una pensión alimenticia para el menor por el equivalente a ***** de la unidad de medida y actualización (****), que mensualmente representa la cantidad aproximada de \$*****

(*****
con
cargo al padre *****.

Sin embargo, considera la Sala, que la pensión alimenticia así establecida no encuentra sustento en el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 288 del código civil, relativo a que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, cuyo porcentaje no podrá ser inferior al ***** ni mayor del ***** del sueldo o salario del deudor alimentista, pero siempre a la luz de la proporcionalidad alimenticia, y en los casos en que no sea comprobable el salario o los ingresos del obligado alimentario, la pensión debe establecerse con base a la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentistas hayan llevado en los últimos dos años.

Es decir, la pensión decretada por la juez en unidades de medida y actualización (****), no encuentra fundamento en el artículo 288 del código civil, pues como se vio, dicho dispositivo legal prevé como formas para determinar una pensión alimenticia el hacerlo en un porcentaje respecto de los ingresos comprobables del

deudor o bien, de no ser comprobables fijar la pensión en una suma de dinero conforme a la capacidad económica y el nivel de vida que acreedor y deudor hayan llevado en los últimos dos años, en la inteligencia que una vez determinada la cantidad aproximada entonces sí pudiera convertirse a **** con el propósito de su constante actualización para no afectar al acreedor alimentista.

Ahora bien, al consultar las constancias de autos con el objeto de verificar si el deudor alimentista ***** cuenta con un empleo cuyo sueldo o salario sea comprobable, o en su caso si los ingresos no son comprobables, lo que es necesario para decidir sobre la pensión alimenticia del menor hijo acreedor; solo se advierte que obtiene ingresos variables o no comprobables en el ejercicio del oficio de carpintería.

Esto es, sobre la base de dicha información, es factible afirmar que los ingresos económicos del demandado no son consistentes ni comprobables, sino variables.

Lo anterior, impide determinar el porcentaje alimenticio que conforme al artículo 288 del código civil

proporcionaría el obligado alimentario; por lo que entonces, debe establecerse el quantum de la pensión de acuerdo a la capacidad económica y el nivel de vida que dicho deudor alimentista y su menor hijo acreedor han llevado en los últimos dos años.

Para ello, era necesario desahogar un estudio socioeconómico que revelara dichos aspectos; sin que conste que el mismo se haya practicado.

Sobre el mismo tema, debe decirse que en términos de los artículos 281 y 289 del código civil, y toda vez que la madre del menor cuenta con un empleo, entonces también está obligada a proporcionar alimentos, con el atenuante de que tiene incorporado al hogar a su menor hijo; sin embargo, no se recabó el informe correspondiente de la fuente laboral que revele el monto de los ingresos económicos, la periodicidad y los gravámenes que pesen sobre el salario.

Luego, lo que procede es la reposición del procedimiento de primera instancia, para el efecto de que, oficiosamente, la juez proceda a desahogar, enunciativa no limitativamente, las siguientes diligencias de prueba:

1. Investigar la capacidad económica y el nivel de vida que el demandado ***** y su menor hijo ***** han llevado en los últimos dos años;

2. Constatar si la actora ***** (madre del menor) labora, y en su caso cuál es la fuente laboral y el monto de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe, así como la periodicidad y los gravámenes que pesen sobre el salario.

Hecho lo cual, la juez deberá dictar la sentencia que en derecho corresponda.

Bajo las consideraciones que anteceden, al resultar fundado el agravio que oficiosamente hizo valer la Sala a favor del menor de edad *****, aunado a lo innecesario que resultó el estudio de los disensos expresados por la parte demandada, con apoyo en el artículo 926 del código de procedimientos civiles, debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar decretar la reposición del procedimiento de primera instancia para los fines que han quedado precisados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. De oficio se suplieron agravios a favor del menor *****, respecto de la sentencia de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente *****, relativo al Juicio Sumario Civil de Alimentos, promovido por ***** en su carácter de madre del citado niño, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; habiendo resultado innecesario abordar los motivos de inconformidad expresados por el demandado apelante *****.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia apelada, y en su lugar se ordena la reposición del procedimiento para que la juez de primer grado, enunciativa no limitativamente, de oficio, desahogue las pruebas siguientes:

*1. Investigar la capacidad económica y el nivel de vida que el demandado ***** y su menor hijo ***** han llevado en los últimos dos años;*

*2. Constatar si la actora ***** (madre del menor) labora, y en su caso cuál es la fuente laboral y el monto de los ingresos ordinarios y extraordinarios que*

percibe, así como la periodicidad y los gravámenes que pesen sobre el salario.

Hecho lo cual, la juez deberá dictar la sentencia que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por unanimidad de votos de los Magistrados Egidio Torre Gómez, Jesús Miguel Gracia Riestra, y Alejandro Alberto Salinas Martínez, siendo Presidente y ponente el primero de los nombrados, quienes firman con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Lic. Egidio Torre Gómez
Magistrado Presidente y ponente

Lic. Jesús Miguel Gracia Riestra
Magistrado

Lic. Alejandro Alberto Salinas Martínez
Magistrado

Lic. Sandra Araceli Elías Domínguez
Secretaria de Acuerdos

Enseguida se publica en lista de acuerdos. CONSTE.
L'ETG/L'JMGR/L'AASM/L'SAED/MMG.

El Licenciado (a) MARTÍN MESINOS GUTIÉRREZ, Secretario Proyectista, Adscrito a la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución Doscientos Treinta y Cuatro (234), dictada el Trece de Junio de Dos Mil Diecinueve, por los Magistrados Egidio Torre Gómez, Jesús Miguel Gracia Riestra y Alejandro Alberto Salinas Martínez, constante de Veintidós (22) fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: (el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y sus demás datos generales, y seguir el listado de datos suprimidos) información que se considera legalmente como (confidencial, sensible o reservada) por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 12 de julio de 2019.